

CONDICION VEINTIDOS  
DE LA SUBASTA

Por la insercion de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condición 19.



## PRECIO DE SUSCRIPCION

Pesetas

Un año dentro y fuera de la capital . . . . . 40  
Un semestre id. id. . . . . 6  
Un trimestre id. id. . . . . 4  
Números sueltos . . . . . 0'25

Se publica todos los dias excepto los Domingos, Viernes Santo, Ascension, Natividad, Corpus Christi y San Roque.

# BOLETIN OFICIAL

## DE LA PROVINCIA DE ORENSE

ADVERTENCIA.—Las leyes obligarán en la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos á la legislación peninsular, á los veinte dias de su promulgacion, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Se entiende hecha la promulgacion el dia en que termine la insercion de la ley en la Gaceta Artículo 1.º del Código civil.)

## PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO  
DE MINISTROS

SS. MM. el Rey, y la Reina Regente (q. D. g.) y Augusta Real Familia, continúan en San Sebastián sin novedad en su importante salud.

## GOBIERNO DE PROVINCIA

## Circular

El Ilmo. Sr. Director general de Establecimientos penales, en telegrama fecha de ayer me dice lo que sigue:

«Sírvasse V. S. ordenar busca y captura de José Alcalde Boca, fugado del penal de Granada el 24 de Agosto último; de estatura 1'700, pelo, cejas negros, ojos melados, nariz regular, cara redonda, boca pequeña, barba poblada, color trigueño.»

En su virtud, los Sres. Alcaldes, fuerza de la Guardia civil, agentes de vigilancia y demas dependientes de mi autoridad, procederán á la busca y captura del expresado sugeto, poniéndolo á disposicion de este Gobierno caso de ser habido.

Orense 5 de Septiembre de 1894.

El Gobernador,

ANTONIO LLAMAS NOVAC

## JUNTA PROVINCIAL

## DEL CENSO ELECTORAL

## Circular

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 47 del Real decreto de 5

de Noviembre de 1890, esta Junta acordó designar las secciones electorales de los Ayuntamientos que á continuacion se expresan, cuyos comisionados interventores tendrán que concurrir necesariamente á la Junta de escrutinio general, que se celebrará el próximo dia 13 del actual en la capitalidad de cada uno de los distritos electorales.

## Distrito electoral de Celanova-Bande

Celanova: 1.ª, 2.ª y 3.ª seccion.  
Villanueva: única idem.  
Bola: 1.ª y 2.ª idem.  
Villameá: 1.ª y 2.ª idem.  
Cartelle: 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª idem.  
Merca: 1.ª, 2.ª y 3.ª idem.  
Freás de Eiras: 1.ª y 2.ª idem.  
Quintela de Leirado: 1.ª y 2.ª idem.  
Gomesende: 1.ª y 2.ª idem.  
Acebedo: única idem.  
Verea: 1.ª idem.

## Distrito electoral de Carballino-Ribadavia

Maside: 1.ª, 2.ª y 3.ª seccion.  
Boborás: 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª idem.  
Irijo: 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª idem.  
Carballino: 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª idem.  
Cea: 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª idem.  
Avion: 1.ª, 2.ª y 3.ª idem.  
Beariz: 1.ª y 2.ª idem.  
Beade: 1.ª idem.

## Distrito electoral de Ginzo-Verin

Rairiz de Veiga: 1.ª, 2.ª y 3.ª seccion.  
Sandianes: 1.ª y 2.ª idem.  
Villar de Santos: única idem.  
Baltar: 1.ª y 2.ª idem.  
Porquera: 1.ª y 2.ª idem.  
Cualedro: 1.ª, 2.ª y 3.ª idem.  
Verin: 1.ª, 2.ª y 3.ª idem.  
Monterrey: 1.ª, 2.ª y 3.ª idem.  
Villardevós: 1.ª, 2.ª y 3.ª idem.

Lo que se hace público por medio de este periódico oficial para

conocimiento de los interesados.

Orense Septiembre 4 de 1894.—

El Presidente, Constantino A. Gallego.—El Secretario accidental, Javier F. de Moure.

## MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

## REALES DECRETOS

Vista la exposicion elevada por la Audiencia de esta Corte en que, usando de las facultades que le concede el art. 2.º del Código, propone que la pena de tres años, seis meses y veintiún dias de presidio correccional impuesta á Vicente Robledo Velasco en causa por malversacion de bienes, se conmute por la de seis meses de arresto:

Considerando que atendidos la ignorancia del reo, la escasa malicia con que procedió y el ningún daño causado por el delito, de la rigurosa aplicacion de la ley penal resulta en este caso notablemente excesiva la condena:

Vista la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gracia de indulto:

De acuerdo con la propuesta de la Sala sentenciadora, con lo consultado por la Seccion de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado y con el parecer de Mi Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en conmutar la pena de tres años, seis meses y veintiún dias de presidio correccional á que fué condenado Vicente Robledo Velasco, por la de seis meses de arresto.

Dado en San Sebastian á treinta y uno de Julio de mil ochocientos noventa y cuatro.—Maria Cristina.

—El Ministro de Gracia y Justicia, Trinitario Ruiz y Capdepon.

Visto el testimonio de la sentencia dictada por la Sala de lo criminal del Tribunal Supremo declarando no haber lugar al recurso de casacion admitido de derecho en beneficio de Isidoro Castillo y Cuadrado, sentenciado á la pena de muerte por la Audiencia provincial de Guadalajara, como autor del delito de robo y homicidio de Anselmo Viejo Yañez:

Considerando que la única circunstancia agravante que se apreció é hizo que se impusiera la pena en su grado máximo fué la de reincidencia, fundada en que Castillo habia sido sentenciado anteriormente á dos multas de 6 y 10 pesetas por estafa y á dos meses de arresto por hurto:

Vista la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gracia de indulto:

Oida la Sala sentenciadora, de acuerdo con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno y conformándose con el parecer de Mi Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en conmutar por la inmediata de cadena perpetua y accesorias correspondientes la pena de muerte impuesta á Isidoro Castillo y Cuadrado en la causa de que se ha hecho mérito.

Dado en San Sebastian á treinta y uno de Julio de mil ochocientos noventa y cuatro.—Maria Cristina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Trinitario Ruiz y Capdepon.

(G. núm. 219)



## MINISTERIO DE LA GUERRA

## Junta calificadora de aspirantes a destinos civiles

Relacion de los destinos vacantes que han de proveerse con sujecion á los preceptos de la ley de 10 de Julio de 1885 y Reales órdenes de 31 de Marzo y 23 de Septiembre de 1891, expedidas por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Num. de orden	Dependencia ó servicio	Categoría	Clase de destino	Sueldo	Gratificaciones y demás ventajas	Plazas	Condiciones especiales
1	Presidencia del Consejo de Ministros Consejo de Estado	1. <sup>a</sup>	Ordenanza	1125			
2	Ministerio de Fomento Junta de Instrucción pública de Salamanca Ministerio de la Gobernación DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	3. <sup>a</sup>	Auxiliar de la Secretaría	1000			
3	Almería. Berja á Darrical	1. <sup>a</sup>	Peaton	450			
4	Burgos. Pineda de la Sierra		Cartero	200			
5	Ciudad Real. Malagon á Fuente el Fresno		Peaton	300			
6	Coruña. Coreubion á Muros		idem	500			
7	Cuenca. Sotos á Torrecil a		idem	300			
8	Gerona. Rupia		Cartero	150			
9	Idem. Llausá		idem	200			
10	Jaen. Villa del Rio á Porcuna		Peaton	875			
11	Palencia. Paredes de Nava á la estacion férrea		idem	150			
12	Santander. La Hermida		Cartero	150			
13	Segovia. San Martín á Samboal		Peaton	350			
14	Toledo. Talavera á Navarmorcuenca (se- gunda conduccion)		idem	450			
15	Valencia. Catarroja		Cartero	200			
16	Idem. Onteniente á Bocairente		Peaton	600			
17	Zamora. Fadon		Cartero	100			
18	Idem. Benavente á Alcubilla de Nogales		Peaton	472.50			
19	Idem. Pozuelo de Távora á Faramontanos		idem	585			
20	Zaragoza. Uncastillo á Fuencaldelas		idem	945			
21	Ministerio de Hacienda Intervencion general de la Administracion del Estado	3. <sup>a</sup>	Aspirante segundo	1000			
			idem	1000			
			idem	1000			
22	Intervencion de la Ordenacion de pagos de Fomento		idem	1000			
23	Intervencion de Hacienda de Cuenca		idem	1000			
24	Idem de Palencia		idem	1000			
25	Idem de Zamora		idem	1000			
26	Direccion general de la Deuda pública		idem	1000			
27	Direccion general de Contribuciones é Im- puestos		idem	1000			
28	Direccion general de lo Contencioso del Es- tado		Aspirante primero	1250			
29	Tesorería de Hacienda de Madrid		Aspirante segundo	1000			
30	Idem de Valladolid		idem	1000			
31	Idem de Málaga	1. <sup>a</sup>	Mozo de caja	625			
32	Administracion de Loterias de primera clase núm. 6 en Valencia		Administrador	Premio	7000		
33	Idem de primera clase de Badalona (Barce- lona)		idem	idem	5600		
34	Idem de segunda clase de Aguilas (Murcia)		idem	idem	2500		
35	Salinas de Torreveja	4. <sup>a</sup>	Depositarío Pagador	1500			
36	Administracion de Hacienda de Cuenca		Oficial quinto	1500			
37	Administracion especial de Hacienda de Vizcaya		idem	1500			
38	Delegacion de Hacienda de Badajoz		idem	1500			
39	Administracion especial de Hacienda de Navarra	3. <sup>a</sup>	Aspirante segundo	1000			
40	Administracion de Hacienda de Cáceres		idem	1000			
41	Idem de Albacete	1. <sup>a</sup>	Ordenanza	750			
42	Resguardo de sales de Torreveja		Dependiente núm. 6	1000			
43	Primera region. Capitanía general de Castilla la Nueva y Extremadura Intendencia militar del Cuerpo de Ejército		Conserje	270			
44	Edificios militares de Salamanca		Alguacil municipal	800			
45	Ayuntamiento de Daganzo de Arriba (Ma- drid)		Peon conservador	825			
46	Direccion del Canal de Isabel II		idem	825			
46	Ayuntamiento de Badajoz	2. <sup>a</sup>	Portero maçero	750			
47	Idem de Anchuras (Ciudad Real)		Auxiliar de la Secretaría	250			

(Concluirá)

Se omiten las condiciones exi- gidas por no haber dado cumplimiento á lo que pre- viene para estos casos el ar- tículo 3.º de la Real orden de 23 de Septiembre de 1891, dictada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Se omiten las condiciones exi- gidas por no haber dado cumplimiento á lo que pre- viene para estos casos el ar- tículo 3.º de la Real orden de 23 de Septiembre de 1891, dictada por la Presidencia del Consejo de Ministros.



## PRESIDENCIA

## DEL CONSEJO DE MINISTROS

## REALES DECRETOS

En el expediente y autos de competencia suscitada entre la Sala de lo civil de la Audiencia territorial de Cáceres y el Gobernador de la provincia de Badajoz, de los cuales resulta:

Que Doña María Josefa Mogollón y Daza, esposa de D. Wenceslao Lobo Malheiro, heredó de su difunto padre D. Antonio Mogollón una finca en término de Herrera del Duque, llamada Cercón, al sitio de los Romeros, de 10 fanegas de cabida, y lindante por Norte con D. Telesforo Casasola y Pablo Babiano; Mediodía camino de Fuenlabrada; Saliente finca de la testamentaria de D. Antonio Mogollón y el dicho Casasola, y Poniente el mismo Pablo Babiano:

Que la referida finca fué inscrita en el Registro de la propiedad á nombre de la referida Doña María Josefa, y después del matrimonio de esta, á nombre de su marido D. Wenceslao Lobo, como dote estimada que aquella le entregó:

Que á consecuencia de la construcción de la carretera de tercer orden de Castuera á Navalpino, en la Sección de Castuera á Herrera del Duque, se procedió á la expropiación forzosa por causa de utilidad pública de los terrenos necesarios á dicha carretera, sin que apareciera en la relación de propietario rectificado el nombre de D. Wenceslao Lobo ni el de Doña María Josefa Mogollón, como dueños de un trozo de terreno ocupado en la referida carretera:

Que el Procurador D. Timoteo Carpio Lopez, en nombre de D. Wenceslao Lobo, en escrito de 11 de Octubre de 1892, promovió interdicto de recobrar la posesión, fundándose en que el demandante, como marido de D.<sup>a</sup> María Josefa Mogollón y Daza, había estado en quietud y pacífica posesión del cercón anteriormente descrito desde el año 1876 hasta pocos días antes en que Antonio Abellán García, Manuel Toledo Gironés, Pedro Rubio Romero y Justo Serrano Lucas se intrusaron en él; que los sujetos mencionados se habían apoderado del cercón, que estaba barbechado y binado para sembrarse en aquel año, levantando dentro de la finca un terraplén, haciendo allí excavaciones, practicando obras de fábrica para una alcantarilla, torciendo desde parte de la finca el libre curso de las aguas que toda ella tenía, depositando en la misma ladrillos y otros materiales de construcción y descargando alguna que otra encima; hechos todos que se habían ejecutado por los expresados individuos, y con los cuales habían despojado al demandante de la referida finca:

Que sustanciado el interdicto y practicada la información, el Juez, después de llenar los demás requisitos legales, dictó sentencia declarando haber lugar al interdicto de recobrar, mandando que inmediatamente se repusiera al dueño en la posesión de su finca, condenando á los despojantes al pago de todas las costas, daños y perjuicios, y previniéndoles que en lo sucesivo se abstuvieran de cometer tales actos:

Que apelada la sentencia anterior por el demandado Manuel Toledo Gironés, le fué admitida, y elevados los autos á la Audiencia del territorio, estando sustanciándose dicho recurso, el Ingeniero Jefe de Caminos, Canales y Puertos acudió al Gobernador, exponiendo que el verdadero dueño de la finca objeto del interdicto era D. José Salgado, á quien le había sido satisfecho el importe de la expropiación en 20 de Mayo de 1892, y solicitando de la Autoridad gubernativa que requiriera de inhibición al Juzgado, como así en efecto lo hizo, de acuerdo con la

Comisión provincial, fundándose en que según se deducía de las comunicaciones que componían el expediente, y con especialidad de un informe emitido por el Ingeniero encargado de las obras, el origen del conflicto estaba en que el demandante Lobo, que no figuraba en la relación nominal de propietarios, se oponía á que se trabajase en la finca núm. 18, que decía pertenecerle, á pretexto de que no se le había satisfecho el importe de la expropiación; en que según las mismas comunicaciones, dicha expropiación fué ya pagada ante la Autoridad local de Herrera del Duque, y si el demandante no había percibido su parte, debió ser, indudablemente, por que no figuró en la relación nominal expresada ni reclamó contra esta omisión; en que el conflicto solo podía ser resuelto por el Gobernador, que era quien con arreglo á la ley de 10 de Enero de 1879 y reglamento para su ejecución, entendía y resolvía en todo lo referente á expropiación; en que por virtud de la admisión del interdicto y denuncias que le precedieron, resultaban infringidas, entre otras, las disposiciones de los artículos 18 y 19 de la ley de 10 de Enero de 1879, que establecen que los Gobernadores civiles son los que han de resolver sobre la necesidad de la ocupación que se intente, pudiendo solo recurrirse en alzada de sus resoluciones al Ministerio correspondiente; en que las providencias gubernativas no pueden ser contrariadas por la vía de interdicto, según doctrina que establece la Real orden de 8 de Mayo de 1839 para las providencias dictadas por los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, y que por constante jurisprudencia viene extendiéndose á las dictadas por todas las Autoridades administrativas:

Que sustanciado el conflicto, la Sala de lo civil de la Audiencia de Cáceres, dictó auto declarándose competente, alegando: que si bien era cierto que se instruyó el expediente de expropiación forzosa para la ocupación de los terrenos por donde había de pasar la carretera de Castuera á Navalpino, no lo era menos, según se reconocía por el mismo Gobernador en su oficio, que en la relación nominal de propietarios no se había incluido á D. Wenceslao Lobo, el cual había acreditado por medio de los documentos que acompañó á su demanda que era el verdadero dueño del Cercón de los Romeros; que conforme á lo preceptuado en el artículo 6.<sup>o</sup> de la Constitución y en el 341 del Código civil, nadie puede ser privado de su propiedad sino por Autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización, y si no procediese este requisito, los Jueces ampararán, y en su caso reintegrarán, en la posesión al expropiado; que conforme al artículo 76 de la Constitución á los Juzgados y Tribunales pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, ejerciendo sus funciones de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado; que según lo preceptuado en el art. 4.<sup>o</sup> de la ley de 10 de Enero de 1879, todo el que se vea privado de su propiedad sin que se hayan llenado los requisitos expresados en el art. 3.<sup>o</sup> de la misma ley, podrá utilizar los interdictos de retener ó recobrar para que los Jueces amparen, y en su caso reintegren, al indebidamente expropiado; que no habiéndose llenado respecto de D. Wenceslao Lobo y Malheiro los requisitos que se determinan en el citado art. 3.<sup>o</sup>, estaba éste en su perfecto derecho al hacer uso de los recursos que en la misma ley se establecen, correspondiendo su conocimiento á la jurisdicción ordinaria, sin que sea motivo justificado para privarla de ello el que no se le incluyera en la relación nominativa de propietarios al instruir el expediente de expropiación

forzosa ó que se incluyera á otro que no fuera dueño de la expresada finca:

Que el Gobernador, oída la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 5.<sup>o</sup> de la ley de Expropiación forzosa, según el cual, las diligencias de expropiación se entenderán con las personas que con referencia al Registro de propiedad ó al padrón de riqueza aparezcan como dueños ó que tengan inscrita la posesión:

Visto el art. 3.<sup>o</sup> de la propia ley, que establece no podrá tener efecto la expropiación á que se refiere el artículo 1.<sup>o</sup> sin que precedan los requisitos siguientes: primero, declaración de utilidad pública; segundo, declaración de que su ejecución exige indispensablemente el todo ó parte del inmueble que se pretende expropiar; tercero, justiprecio de lo que se haya de enajenar ó ceder; cuarto, pago del precio que representa la indemnización de lo que forzosamente se enajena y cede:

Visto el art. 4.<sup>o</sup> de la misma ley, que dispone que todo el que sea privado de su propiedad, sin que se hayan llenado los requisitos expresados en el artículo anterior, podrá utilizar los interdictos de retener y recobrar para que los Jueces amparen, y en su caso, reintegren en la posesión al indebidamente expropiado:

Considerando:

1.<sup>o</sup> Que la presente contienda de competencia se ha suscitado con motivo del interdicto incoado por Don Wenceslao Lobo para recobrar la posesión de una finca que aparece inscrita á su nombre en el Registro de la propiedad y de que ha sido desposeído para la construcción de la carretera de tercer orden que desde Castuera va á Navalpino.

2.<sup>o</sup> Que con arreglo á la ley de 10 de Enero de 1879, las diligencias de expropiación habrán de entenderse con el que resulte en el Registro de la propiedad ser el dueño ó tenga inscrita la posesión.

3.<sup>o</sup> Que apareciendo la finca de que se trata inscrita en el Registro de la propiedad á favor de Doña María Josefa Mogollón, y entregada por esta á su marido D. Wenceslao Lobo como dote estimada, es indudable que con el referido Lobo debieron seguirse las diligencias de expropiación, y que al aparecer que no ha tenido este lugar, es de aplicación rigurosa el art. 4.<sup>o</sup> de la referida ley de 10 de Enero de 1879, toda vez que con el verdadero dueño no se han llenado los requisitos prevenidos en el art. 3.<sup>o</sup> de la misma, procediendo, por tanto, el interdicto y estando los Jueces y Tribunales en la obligación de amparar y de reintegrar al indebidamente expropiado.

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de M.<sup>o</sup> Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Autoridad judicial.

Dado en San Sebastian á trece de Agosto de mil ochocientos noventa y cuatro.—María Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

(G. núm 239)

En el expediente y autos de competencia promovida entre el Gobernador civil de la provincia de Granada y el Juez de instrucción de Guadix, de los cuales resulta:

Que incoadas diligencias criminales en el Juzgado de instrucción de Guadix con motivo de la denuncia formulada por el cabo de los guardas de los montes públicos de aquella localidad

contra D. Francisco Beltran y otros por el supuesto delito de variación de mojones que separaban la jurisdicción de Guadix de la del pueblo de Freila, cometido en los primeros días del mes de Enero 1888, estando practicando el Juzgado las diligencias acordadas en el sumario, el Gobernador de Granada, á quien el Ayuntamiento de Freila había acudido solicitando de su Autoridad requiriera de inhibición al Juzgado, lo hizo así, de acuerdo con el informe emitido por la Comisión provincial y fundándose en las razones que estimó oportunas, pero sin aducir el texto de la disposición legal en que apoyara el conocimiento del asunto:

Que sustanciado el incidente por el Juzgado, este dictó auto en 23 de Octubre de 1889, declarándose competente, alegando al efecto las razones que creyó pertinentes:

Que después de repetidos recordatorios dirigidos por el Juzgado al Gobernador para que manifestase dicha Autoridad si insistía ó no en la competencia entablada, solo consta una comunicación del Gobernador de fecha 3 de Febrero de 1890, en la que manifestaba que los antecedentes obraban en la Comisión provincial, esperando el dictamen de esta para adoptar el oportuno acuerdo; y transcurrido largo plazo sin que la Autoridad requirente pusiera su decisión en conocimiento del Juzgado, este, en providencia de 4 de Abril de 1893, acordó la remisión de los autos á la Presidencia del Consejo de Ministros, donde fueron recibidos con fecha 12 de Mayo:

Que por Real orden de 5 de Agosto siguiente, expedida por dicha Presidencia, se interesó del Gobierno civil de Granada la urgente remisión del expediente gubernativo, remesándose en cambio de este, por haber sufrido extravío, las diligencias practicadas en su busca por aquel Gobierno, de las cuales aparecen antecedentes de haberse oído á la Comisión provincial por el Gobernador requirente, tanto al requerir como al insistir en su requerimiento, sin que dicha comunicación de insistencia en la competencia provocada apareciera en los autos, y resultando de cuanto queda expuesto el presente conflicto:

Visto el art. 8.<sup>o</sup> del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, que dice: «Siempre que el Gobernador requiera de inhibición á un Tribunal ó Juzgado ordinario ó especial, manifestará indispenablemente las razones que le asistan y el texto de la disposición legal en que se apoye para reclamar el conocimiento del negocio»:

Visto el art. 17 del propio Real decreto, que dice: «El Gobernador, oída la Comisión provincial y dentro de los tres días siguientes á la recepción del oficio, dirigirá nueva comunicación al requerido, insistiendo ó no en estimarse competente»:

Considerando:

1.<sup>o</sup> Que el Gobernador de Granada, con infracción de lo dispuesto en el art. 8.<sup>o</sup> del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, no citó en el oficio de inhibición el texto de la disposición ó disposiciones legales en que se apoyara para recabar el conocimiento del asunto, limitándose solo á aducir conceptos ó razones de carácter general, con lo cual no queda cumplido en toda su integridad el precepto contenido en el artículo subsodicho.

2.<sup>o</sup> Que tampoco consta en los autos ni en los antecedentes gubernativos que el Gobernador cumpliera asimismo lo dispuesto en el art. 17 del Real decreto repetido, remitiendo al Juzgado la comunicación desistiendo ó no de la competencia entablada.

3.<sup>o</sup> Que ambos defectos constituyen vicios sustanciales en el procedimiento



que impiden por ahora la resolución del conflicto.

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en declarar mal suscitada y mal formada la presente competencia, que no ha lugar á decidirla, y lo acordado.

Dado en San Sebastian á cinco de Agosto de mil ochocientos noventa y cuatro.—*Maria Cristina*.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

(G. núm. 227.)

## MINISTERIO DE HACIENDA

### REAL ORDEN

Ilmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto por los Sres. Fourcade y Gurtubay contra el fallo de la Junta arbitral de Bilbao, que firmó el pago de los derechos correspondientes á una hélice y su árbol; un ancla y tres anclotes que como piezas de repuestos se importaron con el vapor *Cadagua*, despachados con declaración 9.544/93:

Resultando que el Vista actuario, al verificar el aforo del referido buque, liquidó, además de los derechos de aquél, el de las piezas antes mencionadas por sus partidas respectivas:

Considerando que existiendo certificaciones de la Autoridad de Marina de Bilbao y de los agentes peritos del Bureau Veritas y Registro del Lloyd de Navegación inglesa y extranjera, en las que consta que las piezas en cuestión deben existir en todo buque de vapor para su repuesto, y por lo tanto no hay duda de que deben comprenderse en el adeudo del buque á que pertenecen:

Considerando que del texto de la nota 47 del Arancel que reglamenta esta clase de despachos parece desprenderse que sólo á los buques de vela debe concedérseles piezas de repuesto lo que dará siempre lugar á dudas como las que han motivado la presente reclamación:

Considerando que, desde el momento en que las Autoridades de Marina no consienten, en virtud de los reglamentos respectivos, que navegue un buque de vapor sin las piezas de repuestos necesarias hay que considerar estas como elementos indispensables del barco, y, por consiguiente, deben comprenderse en la citada nota 47 del Arancel para los efectos del adeudo, siempre que se adopten las precauciones necesarias para evitar que al amparo de esta prescripción se pretenda la importación de dicha clase de mercancías para un fin distinto del que les corresponde;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer:

1.º Que se revoque el fallo de la Junta arbitral y se rectifique el aforo como los interesados pretenden.

2.º Que se oficie á la Dirección general del Tesoro para la devolución de las 2.883 pesetas 60 céntimos, cantidad controvertida.

3.º Que se adicione la nota 47 del Arancel en la forma siguiente: «también están comprendidas las piezas de repuesto para los buques de vapor». Cuando las aduanas tengan dudas acerca de si las piezas que se consideren como de repuesto para los buques son ó no las reglamentarias é indispensables, reclamarán de la correspondiente Autoridad de Marina una certificación en que se haga constar la cantidad y clase de las piezas que, dadas las condiciones del buque á que

se destinan, deben estimarse como de repuesto, conforme á lo que prevengan los reglamentos.

Y 4.º Que se publique esta resolución para conocimiento general.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y cumplimiento. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 11 de Julio de 1894.—*Salvador*.—Señor Director general de Aduanas.

(G. núm. 231.)

## ANUNCIOS OFICIALES

### DELEGACION DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE ORENSE

#### Edicto

Aprobado por esta Delegación el nombramiento de D. José Maria Serra Alen, para el cargo de Agente ejecutivo auxiliar de la recaudación subalterna de Puentevedra, en la zona única de Celanova, se hace público por medio de este periódico oficial para el debido conocimiento de las autoridades judicial y municipal de dicho término y demás efectos consiguientes.

Orense 3 de Septiembre de 1894.—El Delegado, Mantecón.

## AYUNTAMIENTOS

### PETIN

La corporación municipal que preside en sesión de ocho de Julio próximo pasado, acordó no modificar la actual división de este distrito en secciones para el nombramiento de la Junta municipal quedando subsistente la división verificada en el último año, así como el número de vocales señalado á cada una de dichas secciones.

Lo que se hace público á los efectos de la ley.

Petin Septiembre 3 de 1894.—El Alcalde, José Maria Diaz.

### VIANA DEL BOLLO

Terminado el proyecto de repartimiento de consumos formado por la Junta repartidora para el corriente año económico, por el cupo total y recargos autorizados, queda expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de ocho días hábiles que empezarán á contarse desde el siguiente al de su inserción en el *Boletín oficial* de la provincia, durante los que y de sol á sol podrán examinar libremente dicho proyecto los contribuyentes y producir contra el mismo las reclamaciones que crean procedentes, las cuales se resolverán por la Junta en sesión pública que celebrará á las ocho de la mañana del día siguiente al en que termine el plazo de exposición así como las que verbalmente se hagan en aquel acto por los interesados.

Viana del Bollo Septiembre 3 de 1894.—El Alcalde, Eldarico Lopez.

## TRIBUNALES

### MUNICIPALES

Don José Alonso Amil, Secretario suplente del Juzgado municipal de Leiro.

Certifico: Que en juicio verbal de que informa la parte inserta, recayó la sentencia cuyo encabezado y parte dispositiva dicen.

En Leiro, á catorce de Julio de mil ochocientos noventa y cuatro, vistas por

el señor Juez municipal Don Nicolás Raña, estos autos de juicio verbal promovido por Don José Vazquez Otero, vecino de Touro, en representación del Excelentísimo señor Don Benito Maria Hermida y Vereá contra Benigno Chao, labrador, vecino que fué de Lebosende, hoy en igarado paradero, sobre pago de pesetas por atrasos de una pensión censal y Falló:

Que debía condenar y condena á Benigno Chao al pago de las ciento veinte y tres pesetas demandadas en razón de atrasos de la pensión censal correspondiente al dominio del señor Don Benito Maria Hermida, cuyo pago hará efectivo con todas las costas causadas dentro de segundo día que sea firme esta sentencia.

Así definitivamente juzgando en primera instancia, la cual se notifique en forma legal á las partes, lo proveyó, mandó y firma dicho señor de que, y haber ocupado en la tramitación de este juicio cuatro horas, certifico.—Nicolás Raña.—Ante mí, José Alonso, Secretario suplente.

Así resulta de lo que queda inserto á que me remito. Y para su inserción en el *Boletín oficial* de esta provincia á los efectos correspondientes, expido la presente con el visto bueno del señor Juez en Leiro, á los mismos catorce de Julio de mil ochocientos noventa y cuatro.—El Secretario suplente, José A. Amil.—Visto bueno: El Juez municipal, Nicolás Raña.

Don Vicente Bazal, Secretario del Juzgado municipal de Monterrey.

Certifico: Que en autos de juicio verbal civil seguido á instancia de Salvador Perez, contra Bernardo Perez, ambos vecinos de Guimarey en este término sobre reclamación de doscientas cuarenta y nueve pesetas cincuenta céntimos, recayó la sentencia que con su encabezado y parte dispositiva dice así:

En Villaza á veinte de Agosto de mil ochocientos noventa y cuatro. Don Fernando Feijóo Rivero, Juez municipal suplente del término de Monterrey en funciones por indisposición del propietario habiendo visto los autos de juicio verbal seguido á instancia de Salvador Perez Gonzalez, mayor de edad, casado, labrador y vecino de Guimarey en este término contra su convecino Bernardo Perez Gonzalez, mayor de edad, casado, labrador, sobre reclamación de novecientos noventa y ocho reales ó sean doscientas cuarenta y nueve pesetas cincuenta céntimos que por el demandado satisfizo á Don Manuel Gallego de la villa de Verin.

Fallo: que debo condenar y condeno al demandado Bernardo Perez á que tan luego esta sentencia sea firme pague al demandante Salvador Perez las doscientas cuarenta y nueve pesetas cincuenta céntimos que le reclama y las costas del juicio, se ratifica el embargo preventivo practicado en los bienes del demandado cual obra en autos. Por esta sentencia definitivamente juzgando que se notifique á las partes haciéndolo al demandado en la forma que determina el artículo 282 de la ley de Enjuiciamiento civil así lo pronuncio, mando y firmo.—Fernando Feijóo.—Dicha sentencia fué publicada en el mismo día de su fecha.

Así resulta del original á que me remito y que conste en cumplimiento de lo mandado expido la presente con el visto bueno del señor Juez en Villaza de Monterrey á veinte y dos de Agosto de mil ochocientos noventa y cuatro.—Vicente Bazal.—V.º B.º: el Juez, Fernando Feijóo.

## ANUNCIOS

### SALON DE VESTIR

DE

### SERAFIN FEIJOO

Plaza Mayor, 16.—Orense

En este acreditado establecimiento hay un magnífico surtido en géneros propios de la estación.

Trajes hechos de lanas y de otros géneros para hombre desde 17 á 65 pesetas uno, y se hacen á la medida á gusto del parroquiano con prontitud, esmero y sin necesidad de probarlos.

Hay capas de buenos géneros y bien hechas.

Hay galones de cabos y sargentos, cordones, hombreras, cintas, borones, otros géneros para guardia civil.

CATALOGOS ILUSTRADOS

GRATIS

Siendo el número mayor de premios alcanzados entre todos los expositores

HA OBTENIDO 64 PRIMEROS PREMIOS

LA COMPANIA FABRIL SINGER

Sucursal en Orense: 36, PROGRESO, 36

CATALOGOS ILUSTRADOS

GRATIS

## CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA

GRAN ESTABLECIMIENTO

DE

### ARBORICULTURA Y FLORICULTURA

Director propietario

DON FRANCISCO VIDAL Y CODINA

Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida,

Proveedor de la Asociación de Agricultores de España

### VIDES AMERICANAS

De producto directo y para porta ingerto. Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España.

Se enviará el catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida.

Representante en esta provincia D. Roberto Justo Nova, Colón, 20, principal.

## CAJISTAS

se necesitan en esta imprenta.

Imprenta LA POPULAR